

de las dos reformas, se pasa a considerar algunos elementos jurídicos que se manifiestan: así el mantenimiento de la vía judicial para estas causas; el principio de celeridad del proceso y, de aquí, la necesaria disminución de las apelaciones; la fundamental responsabilidad de cada Obispo en las causas matrimoniales que,

para los orientales, supone dependencia del Sínodo patriarcal y de la Curia patriarcal; el carácter ejecutorio de una sola sentencia en primer grado; para terminar explicando las posibles apelaciones al Tribunal apostólico (pp. 229-239).

José Antonio FUENTES

---

**José FERNÁNDEZ SAN ROMÁN**, *La admisión al matrimonio de los que notoriamente abandonaron la fe y de los censurados. Estudio histórico-canónico del iter redaccional de los cánones 1065 y 1066 en la codificación de 1917 y de las demás fuentes hasta el Concilio Vaticano II*, [s.n.], Roma 2016, 226 pp.

En este año 2017, en el que se cumple el primer centenario del Código piobenedictino, resulta muy oportuna la publicación de investigaciones históricas sobre el primer código de la Iglesia católica. En este caso, el objeto de estudio de la monografía que comentamos, tiene un interés añadido. Como se recordará, el CIC de 1983 modificó el régimen jurídico del matrimonio canónico de quienes se habían apartado notoriamente de la fe católica, con respecto a la disciplina establecida para esos mismos supuestos por el CIC de 1917. Posteriormente, mediante el motu proprio *Omnium in mentem*, de 26 de octubre de 2009, el Romano Pontífice modificó nuevamente el régimen jurídico de estos matrimonios, «volviendo» –si se puede hablar así– a lo que establecía el CIC de 1917. De este modo, el texto vigente del canon 1086 § 1 del Código de derecho canónico quedó redactado así: «Es inválido el matrimonio entre dos personas, una de las cuales fue bautizada en la Iglesia católica o recibida en su seno, y otra no bautiza-

da». Asimismo se modificaron los cánones 1117 y 1124. El motivo de esta reforma, según consta en el preámbulo del motu proprio, es que «la experiencia de estos años ha mostrado, (...), que esta nueva ley ha generado no pocos problemas pastorales. En primer lugar, ha parecido difícil la determinación y la configuración práctica, en los casos particulares, de este acto formal de separación de la Iglesia, sea en cuanto a su sustancia teológica, sea en cuanto al aspecto canónico. Además, han surgido muchas dificultades tanto en la acción pastoral como en la praxis de los tribunales. De hecho, se observaba que de la nueva ley parecían derivar, al menos indirectamente, una cierta facilidad o, por decir así, un incentivo a la apostasía en aquellos lugares donde los fieles católicos son escasos en número, o donde rigen leyes matrimoniales injustas, que establecen discriminaciones entre los ciudadanos por motivos religiosos; además, esa nueva ley hacía difícil el retorno de aquellos bautizados que deseaban vivamente contraer

un nuevo matrimonio canónico, después del fracaso del anterior; por último, omitiendo otras cosas, para la Iglesia muchísimos de estos matrimonios se convertían de hecho en matrimonios denominados clandestinos».

Más recientemente, el motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*, de 8 de septiembre de 2015, en el Art. 14 § 1, de las Reglas de Procedimiento, recoge que «entre las circunstancias que pueden permitir tratar la causa de nulidad del matrimonio a través del proceso más breve según los cánones 1683-1687, se cuentan por ejemplo: la falta de fe que puede generar la simulación del consentimiento o el error que determina la voluntad, la brevedad de la convivencia conyugal, (...)».

Estos datos, ponen de manifiesto nuevamente la cuestión de la fe de los contrayentes y la relación de ésta con la validez del matrimonio contraído. A ello hay que añadir, el hecho de que en la mayoría de la población de la cultura occidental, muchos católicos viven al margen de las exigencias de su fe.

En la monografía que comentamos «se ha querido verificar a la luz de las fuentes la afirmación de la *Familiaris Consortio* de que establecer criterios de admisión al matrimonio que tengan en cuenta el grado de fe de los futuros contrayentes está en contradicción con la tradición eclesial (p. 109). Esto le ha llevado al autor a estudiar las fuentes legales y doctrinales del matrimonio *cum indignis*, tal como fue regulado en los cánones 1065 y 1066 del CIC de 1917. En diversos pasajes de la obra, se hace constar cómo el régimen jurídico del matrimonio, en lo que atañe a la relevancia de la fe de los contrayentes, tiene muy en cuenta por un lado la inseparabi-

lidad entre contrato y sacramento, y por otro, la peculiaridad del matrimonio, en el que los ministros son los propios contrayentes (p. 126). En la nota 18, de las pp. 125-126, se recogen las palabras del Romano Pontífice Francisco en su alocución a la Rota Romana de 22 de enero de 2013, en la que recuerda «è bene ribadire con chiarezza che la qualità della fede non è condizione essenziale del consenso matrimoniale, che secondo la dottrina di sempre, può essere minato solo a livello naturale (...)».

En esta monografía se responde a la cuestión de en qué medida es relevante o no la fe de los contrayentes para la validez del matrimonio contraído. La respuesta del autor es que la tradición canónica no ha exigido la fe de los contrayentes, ni siquiera en contextos donde los fieles católicos constituían una minoría (p. 126). En algún momento, se plantea también la cuestión pastoral de qué es más conveniente: exigir la fe o no para la celebración del matrimonio. En la parte de la tesis que recoge esta monografía no aparece la respuesta. Sin embargo, puesto que esta cuestión depende de la anterior, en la medida en que la respuesta anterior está clara, debe considerarse respondida indirectamente.

El planteamiento de la obra y la respuesta a la cuestión central, a mi modo de ver está formulado con claridad, sin embargo, es una obra de difícil lectura. En las pp. 217-226 se recoge el índice general de la tesis doctoral completa, de la que esta monografía es un extracto. Queda constancia de la extensión de un trabajo de investigación articulado en XIII capítulos con un extenso apéndice documental. De ese extenso trabajo, la monografía que comentamos sólo publica los capítu-

los VIII, IX, X y XIII. Los capítulos seleccionados están redactados con rigor, pero a pesar del interés y actualidad del tema objeto de la monografía, falta en ocasiones la visión de conjunto. Se recogen Consultas parciales, Observaciones, *Postulata Episcoporum* (capítulo IX, pp. 33 y ss.), *Votum* de Van Rossum (pp. 17 y ss.), de Schrörs (pp. 27 y ss.), de Van Hove (pp. 29 y ss.). Todo ello proporciona al lector mucha información a la que no se tiene acceso normalmente. Sin embargo, no hay muchas reflexiones personales del autor.

En las páginas 126 a 163 de la monografía, bajo el epígrafe «apéndice», se reproducen documentos de gran interés histórico como intercambio de correspondencia entre Gasparri y otras perso-

nas que participaron en la preparación del CIC de 1917, o la documentación preparatoria de la Interpretación auténtica sobre la admisión al matrimonio de los que ignoran la doctrina cristiana (2-3 de junio de 1918). En las páginas 165 a 170 se contiene el elenco de siglas y abreviaturas utilizadas. La bibliografía (tanto las fuentes consultadas como propiamente la doctrinal) se menciona en las páginas 171-215.

Se recomienda la lectura de esta monografía a quienes estén interesados en el estudio de la relevancia de la fe de los contrayentes para la válida celebración del matrimonio, y a los historiadores estudiosos de la primera codificación de la Iglesia.

María J. ROCA

---

**Juan GONZÁLEZ AYESA (ed.)**, *Eficacia en el derecho estatal de normas o actos de las confesiones religiosas*, Ed. Comares, Albolote (Granada) 2015, 252 pp., ISBN 978-84-9045-304-9

Diez miembros del Grupo de Investigación «Culturas, religiones y derechos humanos en la sociedad actual», de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), analizan detalladamente el grado de reconocimiento por parte del ordenamiento español de ciertas normas o actos de las confesiones religiosas. Si se tiene en cuenta que a la cabeza del Grupo se encuentra Miguel Rodríguez Blanco y que la dirección del volumen ha sido responsabilidad de Juan González Ayesa la solvencia de la obra está garantizada.

Como cabe deducir del título mismo, el trabajo responde a un planteamiento

prevalentemente interordinamental del Derecho eclesiástico –que no es el más frecuente en los tiempos que corren–, que propicia una aproximación al objeto de estudio muy pegada a la realidad y de alta elaboración técnica. No en vano la presencia de los derechos confesionales –del Derecho canónico sobre todo– continúa teniendo peso en el seno de nuestro ordenamiento legal.

Aunque, como se declara abiertamente en la presentación de la obra, no se pretende hacer una exposición exhaustiva ni estrictamente sistemática de la materia, sí que aparecen los temas que, de manera razonable, se espera encon-